

La universidad que
el gobierno teme

USINAS DE FUTURO

Apuntes para un conflicto abierto

adiuc

SEGUIMOS
DE PIE

“Las universidades son un obstáculo para el desarrollo”, dijo el presidente que celebra estar haciendo *“el ajuste más grande de la historia”* y se presenta como *“el topo que vino a destruir el Estado desde adentro”*.

Lo dijo unos días después de producida una de las movilizaciones populares más multitudinarias de nuestra historia, en defensa de la Universidad Pública, la segunda en diez meses de gobierno. Mientras miles de estudiantes tomaban un centenar de facultades en todo el país tras el veto a la ley de financiamiento universitario, aprobada por amplia mayoría en las dos cámaras del congreso. Se lo dijo a esos miles que están defendiendo una de las pocas instituciones que les permite imaginar un proyecto de vida, a los miles que los acompañan, y al resto.

Lo dijo sobre un mapa social que en pocos meses duplicó la indigencia y consolidó un fenómeno inédito: el 40% de los salarios formales está bajo la línea de pobreza. Y lo dijo, sabiendo que en todas las encuestas, la gestión y figura del presidente siguen midiendo bien.

Así de complejo y -en muchos sentidos- adverso, el escenario del conflicto universitario.

“No puede ser que estemos discutiendo esto”, rezaba perpleja una pancarta, frente a lo que se presenta como una avanzada con pretensiones fundacionales sobre los consensos básicos de nuestra vida democrática. Porque ya nos ha tocado, en años anteriores, enfrentar políticas orientadas a transformar este modelo de universidad pública, libre, gratuita y federal. Ya nos hablaron del “déficit cero”, de la educación pública como un gasto y una estructura sobredimensionada que necesita ser recortada para equilibrar las cuentas públicas.

Sin ir más lejos, durante el conflicto de 2018 nos preguntábamos *“¿cuánto falta para que se cuestione la necesidad de sostener tal o cual área de conocimientos o se ponga en discusión la gratuidad o el carácter irrestricto de la educación superior?”*, imaginando un escenario demasiado grave como para volverse posible. En aquella oportunidad, la enorme movilización de la comunidad universitaria logró poner un freno a los grandes retrocesos impuestos por las políticas de ajuste.

Pero esta vez es distinto. Enfrentamos un ajuste inédito no solo por su magnitud y celeridad, sino fundamentalmente por su explícita vocación destructiva. Un ataque a la propia existencia del sistema nacional de producción de conocimientos, que representa un obstáculo ideológico y práctico para el programa neocolonial que encarna este gobierno. Y no sólo porque ven en el mercado educativo un apetecible negocio privado:

¿Qué país están imaginando cuando despliegan todos sus recursos físicos, económicos y simbólicos para atacar “lo público” y -con particular ensañamiento- desmantelar las universidades? Uno para pocos, con una economía chica, reprimarizada, concentrada y extranjerizada. Con un Estado reducido al monopolio de la violencia legítima y garante de un único derecho: la propiedad privada.

Es decir, un Estado que renuncia a sus capacidades orientadoras del desarrollo, distributivas y a la ampliación de derechos. En palabras del presidente: “Lo fundamental que tiene que hacer un Estado es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto (...) Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado”.

La educación y la ciencia, afuera. En ese modelo de país no hay lugar para la universidad pública. Frente a la enorme resistencia de la comunidad universitaria, la estrategia oficial apunta a sembrar desprestigio mientras la lleva a una muerte lenta, en cuotas, dejándola secar. Por eso hace mínimas concesiones que consolidan la tendencia. Y por eso, entre otros motivos (entre ellos, la debilidad opositora y el objetivo disciplinador del veto presidencial), por el momento no hemos logrado torcer el rumbo de una gestión que busca fortalecerse en la confrontación.

Representar la pluralidad con vocación democrática y federal

Tuvimos, sin embargo, logros importantes en este año agotador, de conflicto ininterrumpido, que sientan las bases para lo que viene. Destaquemos aquí la enorme capacidad de organización y movilización -en unidad- desplegada en todo el país; **notables avances en la reconstrucción de nuestra comunidad educativa**, que multiplicando espacios de participación y elaborando lecturas compartidas, se fue consolidando como un actor capaz desplegar y sostener acciones de resistencia; la revitalización del cuerpo de delegados/s gremiales, la acción articulada con los gremios del sector educativo de Córdoba y el país, las autoridades universitarias, el movimiento estudiantil, las centrales sindicales y las organizaciones sociales. Una dinámica que prefigura un necesario reordenamiento en el plano organizativo para ser capaces de representar la pluralidad y conducir el conflicto con vocación democrática y federal.

Las históricas Marchas Federales del 23 abril y el 2 octubre despejaron toda duda respecto del consenso mayoritario en torno de la educación superior, pública y gratuita como derecho que debe ser garantizado por el Estado. Logramos la actualización del presupuesto para gastos de funcionamiento, y mantener vivo el reclamo cuando el gobierno lo daba por terminado. Más aún, lo hicimos reinstalando la centralidad del trabajo docente y nodocente, la misión igualitaria del sistema público y su lugar estratégico para el desarrollo nacional. Y la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, **cuya entrada en vigencia hubiera permitido comenzar a revertir la crisis salarial y presupuestaria asignando el 0,14% del PBI: una cifra muy menor al 4,7% del PBI que el estado resigna en exenciones impositivas** a las grandes corporaciones económicas.

Un saldo crítico

Aún habiendo logrado la actualización de la garantía salarial y un incremento de 6,8% en octubre, los salarios docentes y nodocentes están en su mínimo histórico.

La pérdida acumulada durante 2024 equivale a 3,6 salarios, para recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023, deberían aumentar un 32%, y para recuperar su máximo histórico -registrado en agosto de 2015- el incremento debería ser del 90%. En cuanto al presupuesto universitario, registra la peor caída en los últimos 30 años, con un ajuste del 30% respecto de 2023, mientras que las becas para estudiantes cayeron un 68%.

Amparándose en la Ley Bases, el proyecto de Presupuesto 2025 plantea la suspensión de artículos y leyes cuyo incumplimiento garantiza un combo de desinversión y desfinanciamiento en educación y ciencia: 34% de ajuste para las universidades (respecto de 2023) y 40% de caída real de las partidas asignadas al CONICET (respecto de 2024); mientras que la inversión prevista para Educación será del 0,88% del PBI, muy por debajo de los recursos destinados en 2023 (1,48%) y 2024 (0,91%).

El equilibrio fiscal, planteado como principio de solución a todos los problemas, también se sustenta en una estructura impositiva cada vez más regresiva. En este sentido el presupuesto 2025 propone financiarse incrementando el componente impositivo del monotributo (se triplicaría), el impuesto a las ganancias, el combustible y exigiendo un ajuste brutal a las provincias, mientras dispone la reducción de los impuestos a los ricos, como Bienes Personales, o la eliminación del impuesto PAIS para la compra de dólares. Dicho de otro modo, el ajuste no lo paga “la casta”, sino los sectores populares y clases medias.

¿Cómo nos preparamos para lo que viene?

La movilización social es desoída, la vía parlamentaria encontró su límite en el veto presidencial y en una oposición desorientada, mientras los sindicatos sufren el asedio de un gobierno decidido a aniquilar toda forma de organización colectiva. Pero el malestar es creciente, y la irrupción desbordante del movimiento estudiantil reconfigura el escenario de un conflicto que sigue abierto y tiende a profundizarse.

Reafirmando nuestro compromiso con el proceso educativo y en acuerdo con las y los estudiantes, estamos intentando cerrar este año académico, **pero nada de lo que ocurre en las universidades tiene que ver con lo que solemos llamar “normalidad”**. Tras el veto, el gobierno profundiza el ataque con un presupuesto asfixiante, la paritaria salarial sigue suspendida y recrudece la campaña oficial de desprestigio en medios y redes sociales. Nos preparamos para **lo que viene: una agenda dirigida a dinamitar las columnas del modelo universitario:** la gratuidad, la autonomía, su carácter irrestricto, inclusivo, federal **y -fundamentalmente- el consenso en torno a la educación superior como derecho.**

En este nuevo escenario, la continuidad del conflicto puede tomar diversas formas en función de las resistencias que seamos capaces de oponer. Hay algunas pistas en las luchas de este año, sin las cuales estaríamos hoy frente a retrocesos aún mayores. Podemos apuntar, en primer término, la enorme confianza que la sociedad deposita en las universidades como instituciones capaces de cobijar y hacer realidad los

sueños individuales y colectivos. **Debemos trabajar para robustecer este consenso, expandiendo las razones que lo sustentan y dándoles visibilidad.**

En este sentido, nuestra comunidad universitaria, como actor cohesionado, tiene por delante la tarea de reconectar con la experiencia, la sensibilidad, pero sobre todo las necesidades, problemas y aspiraciones de amplios sectores que son el eje de su misión democratizadora y sufren las políticas de ajuste. Redoblar nuestros esfuerzos para atender esta misión es quizás nuestra mejor estrategia en defensa de la universidad pública, entendida como el derecho de nuestro pueblo a beneficiarse de lo que ella sabe, investiga y produce.

Debemos dar un paso adelante y **asumir un rol protagónico en la reconstrucción de un entramado social capaz de formular agendas alternativas** a este presente doloroso. **Ser la universidad que este gobierno teme: una usina de futuro**, capaz de prefigurar y proponer horizontes alternativos al de una sociedad regida por el lucro y el individualismo extremos.

Esta tarea sólo es posible junto a todos los que le dan vida y sentido a la universidad pública. Una definición que invita a pensar y actuar atando nuestra suerte a la de nuestro pueblo. Nos estamos convocando, como parte sustantiva de nuestra tarea, a debatir con otros qué universidad necesita nuestro país, para estar a la altura de una afrenta histórica, que desde la primera magistratura del Estado desafía lo que por mucho tiempo pareció ser un consenso irreversible: ¿nuestro país necesita de estas universidades?



**Un gremio
presente
que construye
futuro**

Av. Haya de la Torre esq. Av. Rogelio Nores Martínez. Córdoba, Argentina

351 865 3911 | info@adiuc.org.ar | adiuc.org.ar